

CASI UN MILLAR DE JÓVENES SE QUEDARÁN SIN CURSAR ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EL CURSO QUE VIENE.

En un nuevo alarde del hilarante desprecio que este gobierno siente por la educación pública en general, y por la formación profesional en particular; la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha reducido, en treinta y cuatro, los Ciclos Formativos de Formación Profesional en la oferta educativa para el curso 2009/10.

Teniendo en cuenta que con cada uno de estos ciclos formativos desaparecen entre veinte y treinta plazas escolares, esta decisión afectará, de manera irreversible, a las expectativas de formación de entre 700 y 1000 jóvenes que no podrán cursar estudios de formación profesional durante el próximo curso o que, en el mejor de los casos, tendrán que desplazarse a otro municipio o conformarse con estudiar cualquier cosa aunque no sea de su agrado. Además, se da la circunstancia de que algunos de los ciclos suprimidos eran ofertados en un único centro en toda la isla o, incluso, en toda la comunidad autónoma, lo que da una idea de la irresponsabilidad que supone la decisión.

Algo parecido ocurre con los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que empezaron a impartirse durante el presente curso como consecuencia directa de la aplicación de la LOE, y que ahora se sustituyen los que conducen al título de Graduado en Enseñanza Secundaria (PCE) por otra modalidad de programas que no conducen a dicha titulación (PCP). Especialmente sangrante, son los casos de La Gomera y El Hierro, donde los dos únicos PCE existentes, uno en cada isla, serán sustituidos por PCP, eliminando toda posibilidad de recuperar, a través de esta vía, a un alumnado que corre el peligro de quedar excluido del sistema educativo, imposibilitándoles cursar un ciclo formativo en el futuro.

Esto sucede poco tiempo después de que la Comunidad Europea haya recomendado potenciar la Formación Profesional como única medida eficaz para frenar el avance del desempleo. Es, por tanto, incomprensible que un gobierno, que se autodenomina nacionalista, desmantele de forma tan evidente uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un pueblo. Máxime cuando se viven tiempos tan duros como los actuales, en que la crisis sigue mandando al paro a muchos trabajadores cada día. Es precisamente en estos momentos cuando el gobierno debe potenciar la formación profesional para que los desempleados puedan ampliar su formación incrementando, así, las posibilidades de encontrar un nuevo empleo o de crear su propia empresa.

Una medida como ésta, no tiene justificación posible, ni atendiendo a criterios económicos, ni de planificación, ni de ningún otro tipo. Se trata, simple y llanamente, de un atentado contra la educación pública, pues será ésta la que sufra todos los recortes. Mientras, se siguen manteniendo esos mismos ciclos en centros privados concertados. Precisamente ahora, que muchas familias no tienen más remedio que volver a matricular a sus hijos en centros públicos por no poder hacer frente a los gastos que suponen los privados.

Por otra parte, la controvertida medida viene a echar más gasolina sobre los rescoldos, todavía candentes, del conflicto con los docentes. Muchos de ellos ven, con rabia y estupor, como se desvanecen sus esfuerzos después de llevar años trabajando duro. Primero, para poner en marcha un ciclo formativo, y después, para mantenerlo. Echándole toda la voluntad y el ingenio para paliar las deficiencias que, debido a la dejadez de la administración educativa, padece la Formación Profesional en Canarias.

Pero esta medida no sólo volverá a encolerizar a los docentes que, sin renunciar a reivindicar sus derechos, habían colocado la homologación en segundo plano debido a

la actual crisis. También es una auténtica tomadura de pelo a toda la sociedad canaria, que lleva dos años escuchando palabras de la consejera del área y del propio presidente del gobierno prometiendo mejoras en la educación pública. Hasta nos han estado adulando con la ilusión de una mesa de calidad que al final ha resultado ser un espejismo.

Y, por si no hubiera bastante, mientras este gobierno desmantela los servicios públicos más esenciales –léase educación, sanidad, justicia y asuntos sociales- y muchas personas se quedan sin empleo y sin vivienda, el Señor Presidente, Don Paulino Rivero, se gasta 120.000 euros -20 millones de pesetas- del erario público en reformar los cinco baños de su chalet de Ciudad Jardín. Entre los que se incluyen 700 euros -unas 116.500 ptas.- en escobillas de retrete. Algo que sólo tiene dos posibles explicaciones, o Don Paulino se ha unido a la “*Experiencia Escatológica Catorce Días*”, o su desprecio hacia la sociedad canaria no conoce límites. Más aún cuando, a pesar de la reforma, sigue viviendo en uno de los hoteles más lujosos de las Palmas de Gran Canaria, también con cargo al bolsillo de los contribuyentes –los mismos que van a perder su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca-

“*Tenemos lo que nos merecemos*”, me decía el padre de un alumno hace unos días. Y quizá no le falte razón pues, ha sido el pueblo canario quien los ha puesto al mando. Confío y espero que seamos capaces de reaccionar antes de que nos hundan el barco.

Emilio J. Armas

Profesor de Formación Profesional,

Delegado de la Junta de Personal Docente no Universitario de Las Palmas
y Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC.